

Señor
JUEZ 11 ADMINISTRATIVO
Bogotá D.C.

REF: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001333501120190004400 DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACION – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Asunto: respetuosa petición

Como apoderado de la actora, teniendo en cuenta tanto el auto admisorio de la demanda como el calendado el 13 de septiembre de 2019, cortésmente solicito al Despacho se sirva indicarme el número de la cuenta y el banco donde debo realizar el depósito relativo a los gastos de notificación a la parte demandada.

No sobra indicar que en Secretaria me informaron que la cuenta había sido cancelada y que pasarían al Despacho el expediente a efecto de que el Señor Juez se pronunciara al respecto.

Como es lógico, si no se me suministran los datos que aquí solicito, me es imposible efectuar la consignación ordenada.

Cordialmente,


JOSÉ GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
C. C. No. 19.400.922 - T.P. No. 46.746 del C.S.J.
roasar.abogados@gmail.com

CONRESPONDENCIA
RECIBIDA

SEP 15 AM 10 57

OFICINA DE APOYO
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

010435



JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA

32

Al Despacho del Dr. MICHAEL OYUELA VARGAS

Hoy

29 de Octubre de 2019

PASA CON SOLICITUD.- PARA PROVEER.-


ANDREA SANABRIA ESPINOSA
Secretaria

No. 11001333501120190004400



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C. 05 DIC 2019

Expediente:	11001-3335-011-2019-00044-00
Demandante:	ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE
Demandado:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(Requiere a la parte demandante)

1. En la providencia del 11 de julio de 2019 (fls.24, 25), se fijaron los gastos del proceso por la suma de \$100.000 pesos en la cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia, necesarios para la notificación a la demandada; así mismo le ordenó a la parte actora que en el término de 5 días siguientes consignará los gastos del proceso, enviará los traslados de la demanda a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio Público.

2. No obstante lo anterior, este Despacho dejará sin efectos el numeral octavo que le ordenó a la parte demandante la consignación de gastos procesales y mantendrá la carga impuesta a la parte demandante de enviar los traslados de la demanda, igualmente allegar a la Secretaría la constancia de entrega.

3. El Despacho, al observar que transcurrieron los 5 días, sin que la demandante hubiere dado cumplimiento a lo ordenado en el numeral octavo de la providencia del 11 de julio. Por lo tanto, se requiere para que en el término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia cumpla con lo requerido, so pena de declarar el desistimiento tácito (Artículo 178 CPACA).

Por lo expuesto, el Despacho

EL JUEZ

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el numeral octavo de la parte resolutive de la providencia del 11 de julio de 2019, así como el Auto de fecha 13 de septiembre del 2019.

SEGUNDO: REQUERIR de conformidad con lo anterior, Se insta a la parte actora para que remita a quien corresponda a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, lo cual deberá acreditar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del presente auto, con las constancias de envío y recibido de los respectivos documentos, so pena de aplicar el desistimiento tácito de la demanda conforme con el artículo 178 del C.P.A.C.A. Una vez sean allegadas las constancias de envío, por secretaría se notificará personalmente esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MICHAEL OYUELA VARGAS

Juez

MOV/RR

JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA 1045

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior, hoy 08 DIC 2019 a las 8:00 a.m.

Secretario



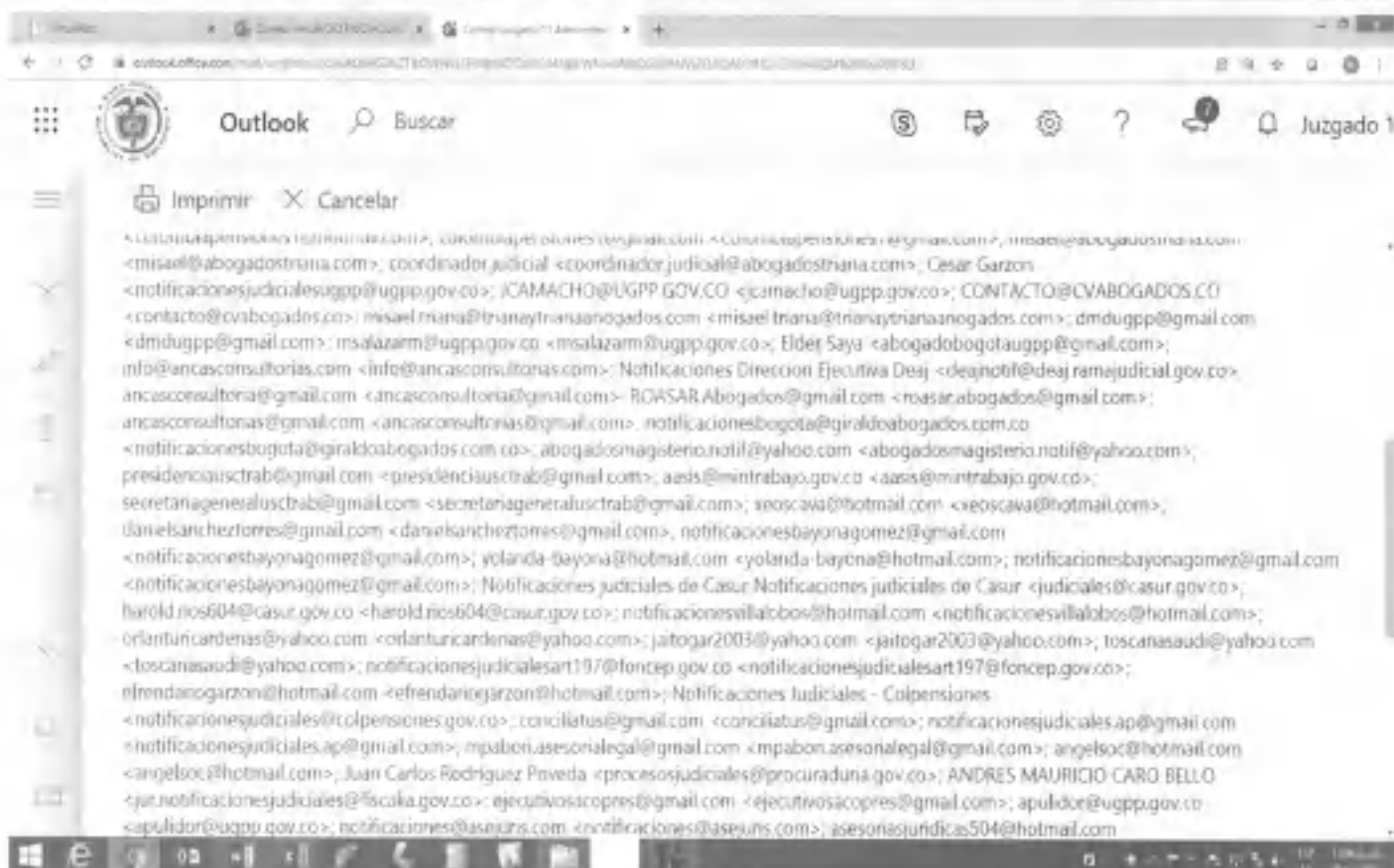
**JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 4.**

J
col

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

CERTIFICA QUE:

Realizó envío de correo electrónico del estado ordinario No. 045 y constitucional 035 de 06 de DICIEMBRE de 2019 a las partes, a través del correo electrónico, jadmin11bta@notificacionesrj.gov.co y se remitió a los siguientes correos electrónicos:



Virtualis x Correo MAURICIO PICO HOLE x Correo Juzgado 11 Administr x

outlook.office.com/mail/verthems/qjAAQAGZTKOWMUTRvINDQMS04yJLWwMh8DQJ3MhVZQAGAD3H1CCGhJwfy3fN2B6J0N30

Outlook Buscar

Imprimir X Cancelar

<jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>; ejecutivosacopres@gmail.com <ejecutivosacopres@gmail.com>; apulidor@ugpp.gov.co <apulidor@ugpp.gov.co>; notificaciones@asejunis.com <notificaciones@asejunis.com>; asesoriasjuridicas504@hotmail.com <asesoriasjuridicas504@hotmail.com>; nidyalazar@medinasalazar.com <nidyalazar@medinasalazar.com>; franz rojas <notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co>; Yenny Zulima Vasquez Alejo <yennyzulima@gmail.com>; clinicajudicial@une.net.co <clinicajudicial@une.net.co>; leison Barbosa <notificacionesjudiciales@unp.gov.co>; juanhec80@gmail.com <juanhec80@gmail.com>; notificacionesjudiciales@cremil.gov.co <notificacionesjudiciales@cremil.gov.co>; notificacion@valencort.com <notificacion@valencort.com>; duvermeyvale@hotmail.com <duvermeyvale@hotmail.com>; gnjc@cremil.gov.co <gnjc@cremil.gov.co>; adalbertocarvajalsalcedo@gmail.com <adalbertocarvajalsalcedo@gmail.com>; luisa.hernandez@mindefensa.gov.co <luisa.hernandez@mindefensa.gov.co>; roaortizabogados@gmail.com <roaortizabogados@gmail.com>; andrusanchez14@yahoo.es <andrusanchez14@yahoo.es>; RICARDO DUARTE ARGUELLO <decun.notificacion@policia.gov.co>; andresgarcia1323@gmail.com <andresgarcia1323@gmail.com>; quintero_andressolonabogados@hotmail.com <quintero_andressolonabogados@hotmail.com>; dehalo0879@gmail.com <dehalo0879@gmail.com>; juridica@subrednorte.gov.co <juridica@subrednorte.gov.co>; ajimenezfandino@hotmail.com <ajimenezfandino@hotmail.com>; alcalde@elcolegio-cundinamarca.gov.co <alcalde@elcolegio-cundinamarca.gov.co>; asesori juridico@elcolegio-cundinamarca.gov.co <asesori juridico@elcolegio-cundinamarca.gov.co>; consultingandlegalservices.sas@gmail.com <consultingandlegalservices.sas@gmail.com>

2 archivos adjuntos (204 KB)

ESTADO 045.1.pdf; ESTADO 035.pdf;

SE NOTIFICA A LAS PARTES DE LOS ESTADO ORALIDAD 045 Y CONSTITUCIONAL 035 DE 2019, ASI MISMO SE LES INFORMA QUE EN ALGUNOS PROCESOS SE HAN FIJADO FECHA DE AUDIENCIAS.-

Windows e 05 x R3 R3 10:08 p.m. 10/12/2019

Se expide en Bogotá, D.C. hoy al SEIS (06) día del mes de DICIEMBRE de 2019 se comunica el estado de la misma fecha.

Atentamente,


ANDREA SANABRIA ESPINOSA
 Secretaria



53

JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA
Carrera 57 No. 43 - 91 Piso 4

Bogotá, D.C., 30 de Enero del 2020

OFICIO N° 00015

Señor
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALLE 72 NO. 7 – 96
Ciudad

ASUNTO : CUMPLIMIENTO ARTICULO 199 DE LA LEY

JUICIO : 110013335011201900044 00

DEMANDANTE : ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE

DEMANDADO : NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

JUEZ : GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO

De conformidad con lo previsto por el artículo 612 del código general del proceso que modificó el artículo 199 de la ley 1437 de 2013, procedo a dar cumplimiento a lo señalado en el inciso 4 ibídem, por tanto me permito enviar los siguientes documentos respecto al expediente de la referencia:

- copia de la demanda
- copia de los anexos de la demanda
- auto admisorio de la demanda

ANEXO: lo anunciado

Atentamente,

ANDREA SANABRIA ESPINOSA

Secretaria

Retira 04-02-2020
Willver Bermúdez
C.C. 80070203
Autorizado apoderado
parte demandante
Willver Bermúdez

De: Roa & Roa Sarmiento <roasar.abogados2@gmail.com>

Enviado: viernes, 4 de septiembre de 2020 15:03

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL ENTREGA OFICIOS

JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL

REF: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001-33-35-011-2019-00044-00

**DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL**

Como apoderado de la actora, por medio del presente adjunto memorial anexando entrega de oficio No. 00015

Cordialmente,

JOSÉ GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
C.C. No. 19.400.922 de Bogotá.

T.P. No. 46.746 del C.S.J.
Celular: 3002650742
Teléfono oficina: 3416614

roasar.abogados@gmail.com
roasar.abogados2@gmail.com

07/09/20
Roa S

37

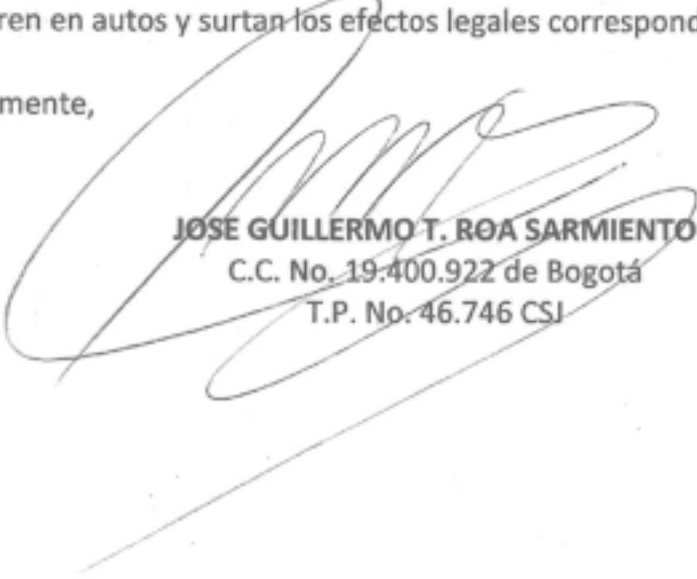
Señor
JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL
Bogotá D. C.

REF: NILIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001-33-35-011-
2019-00044-00 DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Asunto: anexar entrega oficio No. 00015.

Como apoderado de la actora, comedidamente me permito anexar con el presente la copia del oficio No. 00015, donde consta que fueron entregados directamente en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a efecto de que obren en autos y surtan los efectos legales correspondientes.

Cordialmente,



JOSE GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
C.C. No. 19.400.922 de Bogotá
T.P. No. 46.746 CSI



JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA

Carrera 57 No. 43 - 91 Piso 4

2020 FEB -4 P 3: 30

Bogotá, D.C., 30 de Enero del 2020

OFICIO N° 00015

Señor

**NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

CALLE 72 NO. 7 - 96

Ciudad

ASUNTO : CUMPLIMIENTO ARTICULO 199 DE LA LEY

JUICIO : 110013335011201900044 00

DEMANDANTE : ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE

DEMANDADO : NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

JUEZ : GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO

De conformidad con lo previsto por el artículo 612 del código general del proceso que modificó el artículo 199 de la ley 1437 de 2013, procedo a dar cumplimiento a lo señalado en el inciso 4 ibídem, por tanto me permito enviar los siguientes documentos respecto al expediente de la referencia:

- copia de la demanda
- copia de los anexos de la demanda
- auto admisorio de la demanda

ANEXO: lo anunciado

Atentamente,


ANDREA SANABRIA-ESPINOSA
Secretaria

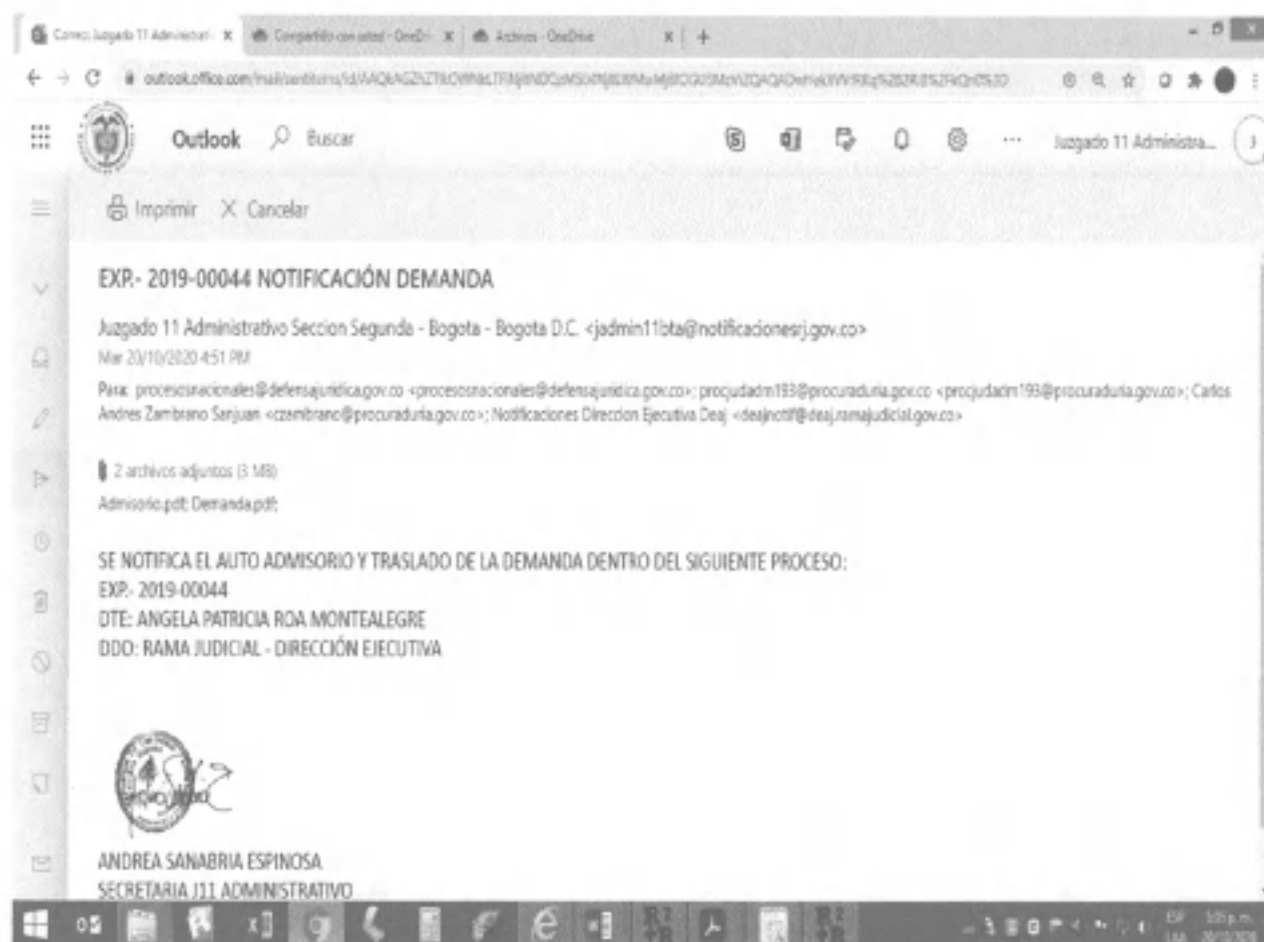


**JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA
Carrera 57. No. 43-91 Piso 4.**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

CERTIFICA QUE:

Se realizó diligencia de notificación personal del auto que admite y la demanda del expediente 2019-00044 a través del correo electrónico jadmin11bta@notificacionesrj.gov.co y se remitió a los siguientes:



Se notificó a los veinte (20) días del mes de octubre de 2020.

Atentamente,

ANDREA SANABRIA ESPINOSA
Secretaria

De: Roa & Roa Sarmiento <roasar.abogados2@gmail.com>

Enviado: viernes, 4 de septiembre de 2020 15:03

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.

<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL ENTREGA OFICIOS

JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL

REF: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001-33-35-011-2019-00044-00 DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Como apoderado de la actora, por medio del presente adjunto memorial anexando entrega de oficio No. 00015

Cordialmente,

JOSÉ GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
C.C. No. 19.400.922 de Bogotá.

T.P. No. 46.746 del C.S.J.
Celular: 3002650742
Teléfono oficina: 3416614

roasar.abogados@gmail.com
roasar.abogados2@gmail.com



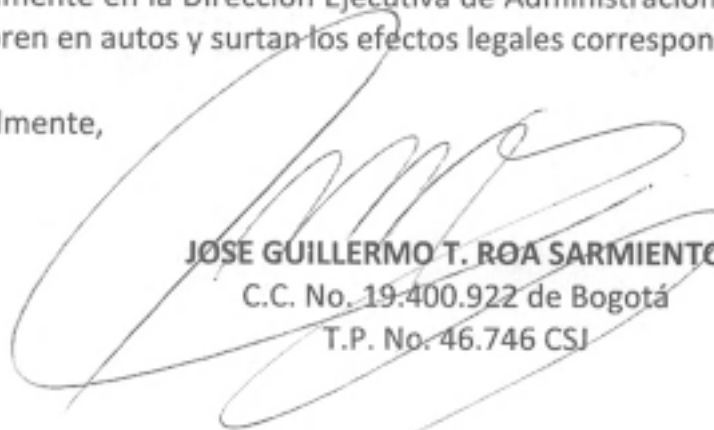
Señor
JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL
Bogotá D. C.

REF: NILIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001-33-35-011-
2019-00044-00 DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Asunto: anexar entrega oficio No. 00015.

Como apoderado de la actora, comedidamente me permito anexar con el presente la copia del oficio No. 00015, donde consta que fueron entregados directamente en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a efecto de que obren en autos y surtan los efectos legales correspondientes.

Cordialmente,


JOSE GUILLERMO T. ROA SARMIENTO

C.C. No. 19.400.922 de Bogotá

T.P. No. 46.746 CSI





JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA

Carrera 57 No. 43 - 91 Piso 4

2020 FEB -4 P 3:30

Lcd

Bogotá, D.C., 30 de Enero del 2020

OFICIO N° 00015

Señor

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALLE 72 NO. 7 – 96
Ciudad

ASUNTO : CUMPLIMIENTO ARTICULO 199 DE LA LEY

JUICIO : 110013335011201900044 00

DEMANDANTE : ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE

DEMANDADO : NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

JUEZ : GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO

De conformidad con lo previsto por el artículo 612 del código general del proceso que modificó el artículo 199 de la ley 1437 de 2013, procedo a dar cumplimiento a lo señalado en el inciso 4 ibídem, por tanto me permito enviar los siguientes documentos respecto al expediente de la referencia:

- copia de la demanda
- copia de los anexos de la demanda
- auto admisorio de la demanda

ANEXO: lo anunciado

Atentamente,

ANDREA SANABRIA ESPINOSA

Secretaria

De: Roa & Roa Sarmiento <roasar.abogados2@gmail.com>
Enviado: viernes, 4 de septiembre de 2020 15:03
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: MEMORIAL ENTREGA OFICIOS

JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL

REF: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001-33-35-011-2019-00044-00 DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Como apoderado de la actora, por medio del presente adjunto memorial anexando entrega de oficio No. 00015

Cordialmente,

JOSÉ GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
C.C. No. 19.400.922 de Bogotá.

T.P. No. 46.746 del C.S.J.
Celular: 3002650742
Teléfono oficina: 3416614

roasar.abogados@gmail.com
roasar.abogados2@gmail.com



24

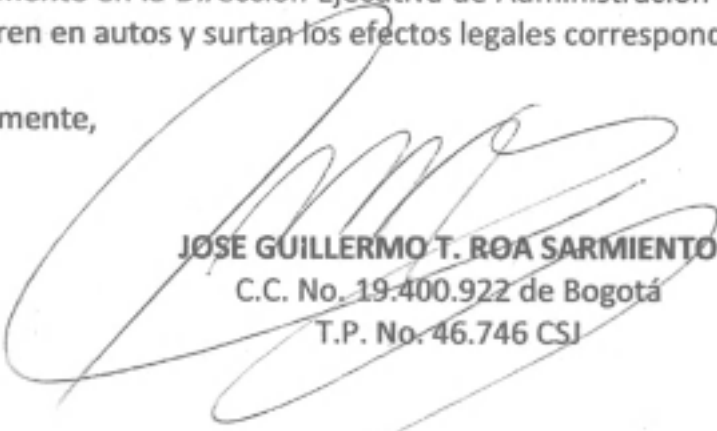
Señor
JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL
Bogotá D. C.

REF: NILIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 11001-33-35-011-
2019-00044-00 DE ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE vs. LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Asunto: anexar entrega oficio No. 00015.

Como apoderado de la actora, comedidamente me permito anexar con el presente la copia del oficio No. 00015, donde consta que fueron entregados directamente en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a efecto de que obren en autos y surtan los efectos legales correspondientes.

Cordialmente,



JOSE GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
C.C. No. 19.400.922 de Bogotá
T.P. No. 46.746 CSJ



JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA

Carrera 57 No. 43 - 91 Piso 4

2020 FEB -4 P 3:30

Lcd

Bogotá, D.C., 30 de Enero del 2020

OFICIO N° 00015

Señor

**NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

CALLE 72 NO. 7 – 96

Ciudad

ASUNTO : CUMPLIMIENTO ARTICULO 199 DE LA LEY

JUICIO : 110013335011201900044 00

DEMANDANTE : ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE

DEMANDADO : NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

JUEZ : GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO

De conformidad con lo previsto por el artículo 612 del código general del proceso que modificó el artículo 199 de la ley 1437 de 2013, procedo a dar cumplimiento a lo señalado en el inciso 4 ibídem, por tanto me permito enviar los siguientes documentos respecto al expediente de la referencia:

- copia de la demanda
- copia de los anexos de la demanda
- auto admisorio de la demanda

ANEXO: lo anunciado

Atentamente,


ANDREA SANABRIA-ESPINOSA
Secretaria

Juzgado 11 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.

De: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
Enviado el: martes, 2 de febrero de 2021 3:22 p. m.
Para: Juzgado 11 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C.
Asunto: RV: CONTESTACION DEMANDA - 11001333501120190004400
Datos adjuntos: 1. ANEXOS PODER - RES. 5393 - DELEGACION REPRESENTACION JUDICIAL.pdf;
 2019-00044 - CONTESTACION DEMANDA - DCTO 383 CON PRES.pdf; CERT ANGELA
 PATRICIA.pdf; PODER DEAJ - 11001333501120190004400.pdf



Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
 Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
 Sede Judicial CAN
 RJLP

De: Angelica Paola Arevalo Coronel <aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 2 de febrero de 2021 9:52 a. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: ROASAR.Abogados@gmail.com <roasar.abogados@gmail.com>; Angelica Paola Arevalo Coronel <aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONTESTACION DEMANDA - 11001333501120190004400

Señor
Juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
roasar.abogados@gmail.com
 Ciudad

Referencia: Expediente: 11001333501120190004400
 Naturaleza: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Demandante: **ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE**
 Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
 ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su

contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**

DEAJALO21-410

Bogotá D. C., 1 de febrero de 2021

Señor

Juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

roasar.abogados@gmail.com

Ciudad

Referencia: Expediente: 11001333501120190004400
Naturaleza: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: **ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE**
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ANGÉLICA PAOLA ARÉVALO CORONEL, mayor de edad, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL en el proceso de la referencia, de conformidad con el poder conferido por la Directora de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien tiene delegada la función de representación judicial y extrajudicial de la entidad, la cual fue otorgada mediante Resolución No. 5393 del 16 de agosto de 2017, de manera respetuosa me permito presentar, dentro del término legal establecido, **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**, bajo los argumentos que se pasan a exponer:

I. A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas las declaraciones y condenas solicitadas en el libelo de la demanda, y solicito se absuelva de las mismas a la Entidad que represento, declarando probadas las excepciones que se proponen en el acápite correspondiente.

II. A LOS HECHOS

En relación con los hechos, la entidad demandada únicamente acepta los relativos a los cargos desempeñados por la parte actora en la Rama Judicial, así como los extremos temporales que se encuentren debidamente soportados documentalmente.

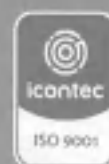
Así mismo, se aceptan los relacionados con la presentación de la petición en sede administrativa, la expedición del acto que hoy emerge como acusado, y el trámite de conciliación prejudicial, adelantado ante la Procuraduría General de la Nación.

Frente a los demás hechos presentados en la demanda, es pertinente advertir al Despacho que se tratan de enunciaciones normativas, jurisprudenciales y apreciaciones subjetivas de la apoderada de la parte actora.

III. RAZONES DE LA DEFENSA

1. RESUMEN DEL CASO

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador – 3127011 www.ramajudicial.gov.co



SC5780-4



ISO 14001

En la demanda la parte actora solicita se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reliquidar y pagar de manera retroactiva, indexada y con los respectivos intereses moratorios y sanciones por la mora en el pago, el reajuste de la asignación mensual y de todas las prestaciones sociales recibidas desde el año 2013 hasta que se haga el reajuste y en adelante, en virtud de la bonificación judicial mensual reconocida mediante el Decreto No. 0383 de 6 de marzo de 2013, como remuneración con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales incluidas las cesantías e intereses a las cesantías de esta bonificación mensual como salario.

2. FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 150, numeral 19, literales E) y F) de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

En ejercicio de dicha facultad el Legislativo expidió la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual autoriza al Gobierno Nacional, sin restricción alguna, para fijar el régimen salarial y prestacional de los del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones empleados públicos, entre estos los de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los miembros sociales de los Trabajadores Oficiales, para lo cual debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos y criterios: El respeto de los derechos adquiridos tanto del régimen general, como de los especiales; La sujeción al marco general de la política macro económica y fiscal; La racionalización de los recursos público y su disponibilidad; El nivel de los cargos en cuanto a la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.

De manera que es en virtud de la Constitución Política de 1991 y lo establecido en la citada Ley que la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional.

Así pues, nace el Decreto 0383 del 6 de marzo de 2012, *"Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones"*, normativa que estableció lo siguiente:

"...ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud."(Se destaca)

En iguales términos fue regulado por el Decreto 384 de 2013 *"por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones"*, y por los Decretos 1269 de 2015 y 246 de 2016.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio.

Los Decretos 383 de 2013, 384 de 2013, 1269 de 2015 y 246 de 2016 instituyeron también, cada uno en su respectivo artículo 3º, la siguiente previsión legal:

“..ARTÍCULO 3º. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ...” (Subrayas propias).

Consecuencia de las normas precitadas, es que por expreso mandato legal la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización.

Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional, como lo evidencian los decretos expedidos por el Ejecutivo para ajustar el monto de la referida Bonificación en las vigencias 2015 y 2016, quedando por lo tanto resuelta de plano la pretensión del interesado concerniente a “..ajustes equivalentes al IPC del 02%..”.

3. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES DE LEGALIDAD Y DE CONSTITUCIONALIDAD QUE AVALAN EMOLUMENTOS LABORALES SIN CARÁCTER SALARIAL

El Consejo de Estado en sentencia del 19 de junio de 2008, Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00043-00 (0867-06), Actor: PABLO J. CACERES CORRALES, Consejero ponente: Dr. JAIME MORENO GARCIA, ratificó el carácter NO SALARIAL de la Bonificación de Actividad Judicial creada por el Decreto No. 3131 del 08 de septiembre de 2005, para Jueces de la República y otros funcionarios, providencia en la que se indicó que las normas que fueron acusadas en el momento en que señalaron que dicha bonificación al señalar que no tendría carácter salarial ni prestacional, no desconocieron ningún derecho adquirido ni violaron las disposiciones constitucionales y legales, que sustentó el demandante en la demanda, ya que precisamente fue creada como una suma adicional al salario, por lo que en ningún momento existió una desmejora del mismo.

Es así que, el legislador está facultado por la propia Constitución para fijar los estímulos salariales y prestaciones de los servidores públicos, puesto que tiene libertad para disponer que determinados emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos de salario, resultando en consecuencia que bajo ese presupuesto el ordenamiento que instituyó la Bonificación Judicial de ninguna manera podría considerarse como inconstitucional, ilegal o violatorio de pactos internacionales.

Por su parte, La Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución en sentencia C-279 de 1996 declaró exequible el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en su redacción original, que determinaba que la prima especial allí creada no tendría carácter salarial para

ningún efecto, en razón de la libertad de configuración del legislador. Para el efecto tuvo en cuenta la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de febrero de 1993 (radicación 5481), cuando al referirse a la interpretación de los arts. 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia de la Ley 50 de 1990, expuso que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular prestaciones e indemnizaciones, ello no impide que el legislador disponga que alguna prestación social o indemnización se liquide sin el monto total del salario del trabajador, es decir, que se incluyan ciertos factores. Y, concluyó en la providencia que el legislador al determinar que algunas primas no tengan carácter salarial, en ningún momento lesiona los derechos del trabajador.

Al año siguiente, en la sentencia C-444 de 1997 la Corte Constitucional declaró exequible que la Ley 332 de 1996 al modificar el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, le diera efecto a dicha prima exclusivamente para liquidar la pensión y que se excluyera a quienes ya estaban pensionados.

Seis años después, en la sentencia C-681 de 2003 la Corte Constitucional declaró inexecutable la expresión "sin carácter salarial" del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, por violación del principio de igualdad de los funcionarios del artículo 15 con los funcionarios del artículo 14, a quienes se les tiene en cuenta para cotizaciones y liquidación de la pensión por la modificación que en tal sentido introdujo la Ley 332 de 1996 al artículo 14, pero de ningún modo porque se haya considerado que existe el derecho constitucional a que todo pago salarial sea base de liquidación de prestaciones.

Igualmente, y más recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-395 de 2017, reiteró: "...no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter... Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que "el legislador conserva una cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución."

Igualmente y en lo relacionado a la vulneración de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional en la sentencia No. C-410-97 del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, doctor HERNANDO HERRERA VERGARA, expresó, entre otros que los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, por lo tanto, se encuentran garantizados, de tal manera que no pueden ser desconocidos por situaciones futuras; sin embargo, las simples expectativas son diferentes al derecho adquirido, ya que se tratan de aquellas probabilidades o esperanza de obtener algún día un derecho, por lo que pueden ser modificadas por el legislador.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo expresado por la H. Corte Constitucional en la sentencia citada en precedencia, y la filosofía del legislador con la expedición de los Decretos 383 y 384 del 6 de marzo de 2013, claramente expuesta por el Alto Tribunal Constitucional, se tiene que a la parte demandante no se le ha vulnerado derecho adquirido

alguno, en consideración a que el derecho que reclama, ha sido creado por el Gobierno Nacional hasta en los Decretos en cita, razón por la que no hacía parte de su patrimonio antes de la expedición del mismo, por lo tanto, no le ha sido arrebatado o vulnerado, pues es a partir de la creación de este concepto salarial y seguidos los lineamientos del ejecutivo como órgano competente en su expedición, que se entró a liquidar y a devengar este concepto. Hasta allí era una expectativa y empezó a formar parte de su patrimonio como lo previó el legislador, sin carácter de factor de salario para liquidar sus prestaciones sociales, así nació y así lo concertaron las partes, Rama Judicial, ASONAL y el ejecutivo, luego entonces, no se violó algún derecho adquirido y no hay lugar a cancelar diferencia prestacional alguna a título de Bonificación Judicial al funcionario judicial.

Es por ello que el Gobierno Nacional no desconoce o lesiona los derechos reclamados, pues los derechos adquiridos son intangibles, y para el caso en estudio, la Bonificación Judicial creada en los Decretos 383 y 384 de 2013, fue el producto de una reclamación salarial a través del paro judicial, que hasta ese momento, era una mera expectativa o esperanza de obtener un derecho, susceptible de ser modificada discrecionalmente por el Gobierno Nacional y que a la postre, se configuró con la expedición de la norma precitada.

4. DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La parte actora en la demanda, solicita sea declarada la excepción de inconstitucionalidad, la cual, constituye un mecanismo otorgado a los funcionarios públicos y a la jurisdicción, para amparar tanto a la Constitución como a los particulares, cuando se ven comprometidos sus derechos fundamentales o constitucionales por la aplicabilidad de una norma legal vigente, pero como la norma no señala cual es el juez competente para conocer de los procesos en los que se propone dicha excepción.

La Corte Constitucional en la Sentencia de tutela T-006 del 17 de enero de 1994, Expediente No. T-20850, Magistrado Ponente: VLADIMIRO NARANJO MESA, frente a la excepción de inconstitucionalidad expresó que, si el Juez encuentra fundada *"la demanda de inconstitucionalidad, dejará de aplicar la ley, pero únicamente para quien lo solicitó. Al contrario de lo que sucede en la acción de inconstitucionalidad, la ley conserva su eficacia jurídica, es decir, no se anula, y por consiguiente podrá ser aplicada posteriormente, siempre que no se le oponga la excepción de inconstitucionalidad. El objeto de la excepción no es pues la anulación, sino la no aplicación de la ley en el proceso establecido."* Y, agregó: *la excepción sólo puede imponerla la parte interesada dentro del litigio, y no produce efectos sino respecto de ella, es decir, individuales. Por otra parte, a diferencia de la acción, la excepción de inconstitucionalidad no requiere de tribunales especiales, sino que puede ser conocida por los tribunales ordinarios."*

Esta posición jurisprudencial la reafirmó la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-150 de 1995¹.

¹ "...La Corte ha tenido oportunidad de referirse al tema y sobre el particular, ha manifestado: "El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la

En consecuencia, se deduce, que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como autoridades administrativas, agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento, pues no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen esa potestad.

Corolario de lo anterior y teniendo en cuenta lo preceptuado por el Art. 3° del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se adujo:

"...ARTÍCULO 3o. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuído por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos." (Subrayas propias).

En los mismos términos está regulado en el artículo 2 del Decreto 384 de 2013.

Tampoco le es dable a la Administración acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 0383 de 2013 o del Decreto 0384 de 2013, competencia atribuible única y exclusivamente al Gobierno Nacional.

Sumado a lo anterior, no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición en cita que regula la Bonificación Judicial, toda vez que, como se indicó en el acápite anterior, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución Nacional el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

De manera que no hay lugar a inaplicar por inconstitucional la expresión "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", contenida en el artículo primero de los Decretos N° 0383 y 0384 de 2013, en el entendido de que la bonificación judicial debe constituirse en factor salarial para todas las consecuencias legales que comporte, se debe destacar que la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido del Decreto 383 de 2013 y del Decreto 384 de 2013, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3° y 2°, respectivamente, citado textualmente en párrafos anteriores, razón por la que solicito señor Conjuez, niegue las pretensiones de la demanda y confirme la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, proferidos por la Dirección Seccional de Bogotá y Ejecutiva de Administración Judicial, de lo contrario estaría desacatando el ordenamiento legal vigente.

Por otra parte, en la sentencia SU-132 de 2013, la Corte Constitucional señaló que la inaplicación por inconstitucionalidad es una herramienta se usa con el fin de proteger, en

providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de otro orden a un caso singular."

un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

Por tanto, la única posibilidad que tiene la administración de apartarse de las normas es cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que no ocurre en el presente caso, como quiera que los Decretos 383 y 384 de 2013, que crearon la Bonificación Judicial y regulan su liquidación están vigentes, y es en virtud del principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Política, que como autoridad debe acatarlos y cumplirlos, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida estas normas en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del mismo.

En tal virtud, solicito no acceder a las pretensiones de la demanda en el sentido de incluir en la liquidación de las prestaciones sociales de los beneficiarios de la Bonificación Judicial el valor por ésta reconocido como factor de salario (y la cual sólo se debe tomar para los aportes a los sistemas de salud y pensión) y que hoy surgen de la interpretación errada que el servidor judicial tiene de la norma, pues como autoridad administrativa y guardadora del principio de legalidad, a la Administración Judicial le corresponde acatar estrictamente el ordenamiento legal vigente, sin que le sea posible interpretarlo o inaplicarlo, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros a través de sus sentencias los que tienen tal potestad

Por lo anterior, no hay lugar a acceder a las pretensiones formuladas por la parte demandante, toda vez que al hacerlo, comportaría la modificación del régimen salarial ya establecido en la ley por la autoridad competente, facultad que no nos está dada.

IV. EXCEPCIONES

1. DE LA VIOLACIÓN DE NORMAS PRESUPUESTALES DE RECONOCERSE LAS PRETENSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

Es menester indicar que la Bonificación Judicial fue regulada sin carácter salarial para efectos prestacionales y que a la fecha los decretos que la reglamentan no han sido declarados nulos, es decir, siguen gozando de presunción de legalidad, por lo tanto es deber de la Dirección Ejecutiva y sus Direcciones Seccionales acatar sus regulaciones, pues, de llegar a reconocerse su carácter salarial para todos los efectos, como lo pretenden los actores, no solo se desconocerían tales decretos, sino que también se iría en directa contravía de las disposiciones de presupuesto, especialmente, de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996*, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, que prevé:

****ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.***

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que se adquiere con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/94, artículo 49). (Se resalta)

Igualmente, podría desconocerse lo previsto en el Decreto 1068 de 2015², en su artículo 2.8.3.2.1, que establece:

**Artículo 2.8.3.2.1. Disponibilidad y Registro Presupuestal Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.*

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS o quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen. (se destaca)

Lo anterior por cuanto no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

Hoja No.9

Al respecto, la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en la sentencia C-337 de agosto 19 de 1993, sostuvo que: "las normas orgánicas del presupuesto regulan y limitan la actividad de las diferentes entidades y órganos del Estado, tanto en los actos que pueden realizar en el ejercicio de sus funciones que conllevan ejecución presupuestal, como en las formalidades y requisitos que deben cumplir. De tal suerte que todos los actos administrativos que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad presupuestal en los términos de la Ley 38 de 1989 y 179 de 1994 orgánicas de presupuesto." (Subrayas fuera de texto).

Adicionalmente, reconocer las pretensiones que reclama la parte actora sin la autorización presupuestal requerida, implicaría que el ordenador del gasto estuviera inmerso en actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 734 de febrero 5 de 2002, que en sus artículos 22 y 23².

2. INTEGRACIÓN DE LITIS CONSORCIO NECESARIO

El Artículo 61 del C.G.P. determina:

"... Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes faltan para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio."

²"ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honestidad, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficiencia y eficacia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento (1)".

Concordante con lo anterior, es necesario anotar, que en materia de competencia, conforme está consagrado en el artículo 150, numeral 19, literales E) y F) de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

En ejercicio de dicha facultad el Legislativo expidió la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual autoriza al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre estos los de la Rama Judicial.

De manera que es en virtud de lo establecido en la citada Ley, que la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, es quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia la Rama Judicial del Poder Público - Consejo Superior de la Judicatura, pues solo cumple sobre estos actos administrativos una vez expedidos por la autoridad competente, una función ejecutora, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales en los términos y valores establecidos de manera anual en cada tabla de salarios. Por lo dicho se estima que la defensa de legalidad de estos actos hoy demandados está en cabeza del ejecutivo.

Adicional a lo anterior, cabe destacar que a pesar de que no se demandan los Decretos que regularon la Bonificación Judicial y que de plano el Conjuez podría negar la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás entidades mencionadas, debido a que los actos sobre los cuales se va a ejercer control de legalidad fueron expedidos por la Dirección Ejecutiva o Dirección Seccional de Administración Judicial, **en caso de una eventual condena**, se debe tener en cuenta la imposibilidad material de la Nación – Rama Judicial de reconocer los derechos ahora reclamados, como se indicó en el anterior numeral, pues debe considerarse que en atención a lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al presupuesto de gasto sobre apropiaciones inexistentes, lo que significa que en el caso de acceder a las pretensiones de la demanda si está vinculada la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de paso se daría la orden a dicha cartera para que se hiciera la apropiación a favor de la Rama Judicial y así pagar la condena correspondiente sin que a futuro se puedan iniciar procesos ejecutivos por la falta de pago debido a que dicho Ministerio no hace el giro de los dineros suficientes para el rubro de sentencias y de gastos de personal.

Adicionalmente, resulta necesario tener en cuenta el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjuces, Exp. 2016-00375, Dte: Leonel Díaz Mora, en audiencia inicial celebrada el 27 de julio de 2018, en el cual aceptó el llamamiento en garantía de la Nación – Presidencia de la República, Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, bajo el argumento que estas entidades podrían eventualmente verse perjudicadas o beneficiadas con la decisión que se tomara en el caso correspondiente a las reclamaciones salariales allí pretendidas.

Así las cosas, nótese señor Conjuez la necesidad de vincular a las entidades solicitadas.

Por ende, de manera cordial, le solicito a su señoría se sirva llamar como LITIS CONSORTE NECESARIO a la NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, representada por el Dr. IVAN DUQUE MÁRQUEZ, a la NACIÓN - MINISTRO DE HACIENDA, representada por el doctor ALBERTO CARRASQUILLA y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, representado por el doctor FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO, Director.

3. AUSENCIA DE CAUSA PETENDI.

Por mandato expreso de los Decretos 383 y 384 de 2013, la **bonificación judicial no tiene carácter salarial para efectos prestacionales**, sino únicamente para Seguridad Social en salud y pensiones, lo que significa que dicho emolumento no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, y en ese sentido, a la actora no le asiste causa para reclamar por vía judicial las declaraciones planteadas en el libelo introductorio.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se encuentra ceñida al ordenamiento jurídico y viene dando estricto cumplimiento a las normas que rigen al interior del Régimen Salarial y prestacional de los servidores públicos, con el único propósito de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo, por tanto, no es posible producir efectos jurídicos de carácter particular contrariando disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de controversia.

4. PRESCRIPCIÓN

En relación con la prescripción de los derechos prestacionales, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone: *"Las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en **tres años** contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual."*

En el presente caso ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la parte actora, que no fueron reclamados oportunamente, para tal efecto debe tenerse en cuenta que la parte demandante radicó la petición ante la Seccional Bogotá el **30 de enero de 2018**, razón por la cual, las sumas reclamadas con anterioridad al **30 de enero de 2015**, se encuentran prescritas.

Se debe indicar que se debe aplicar la prescripción trienal sobre las sumas de dinero que reclama la parte actora, pues se tratan de sumas de dinero que se causan sucesivamente, situación que por la inactividad de la parte demandante no deba afectar a la Rama Judicial, sino que por el contrario se sanciona haber dejado transcurrir dicho tiempo no solo de la petición del pago de la prima especial como factor salarial, sino de la presentación de la demanda. Por lo tanto, solicito honorable Juez declare probada esta excepción.

5. INNOMINADA: Prevista en el inciso segundo del artículo 187 del C.P.A.C.A., esto es, *"sobre cualquiera otra que el fallador encuentra probada"*.

V. PRUEBAS

Comedidamente solicito al Honorable Conjuez, decretar las pruebas de oficio que considere pertinentes y útiles en el proceso y tener en cuenta los antecedentes administrativos adjuntos con el escrito demandatorio, que son: copia del derecho de petición, el acto administrativo enjuiciado, la constancia que incluye los tiempos de servicios de la parte demandante; razón por la cual, considero no es necesario allegarlos nuevamente, sin que se imponga sanción alguna, toda vez que lo que se pretende a través de lo allí dispuesto es la incorporación del expediente administrativo a fin de que el Juez de conocimiento, pueda examinar la génesis de la actuación administrativa impugnada.

Adicionalmente, resulta necesario indicar que los antecedentes administrativos ya obran dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se reitera, fueron allegados por la parte actora con la demanda y, por lo tanto, se solicita que en el momento procesal oportuno se le otorgue el valor probatorio correspondiente conforme a la ley, sin que se considere que existe una desatención a lo ordenado en el admisorio de la demanda.

De las pruebas solicitadas por la parte actora

La parte actora solicita se ordene oficiar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con el fin de que se certifique el salario devengado por la actora por el tiempo laborado como Juez de la República y se remita lo que por todo concepto han devengado los Magistrados de Altas Cortes durante los últimos 15 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito al señor Juez de manera respetuosa niegue esta prueba por ser inconducente, toda vez que de acuerdo con el certificado de tiempo de servicios que se anexa junto con la demanda, se evidencia que la parte actora no ha desempeñado el cargo de Juez de la República; además, en cuanto a la controversia que ahora se discute, esto es, bonificación judicial del Decreto 383 de 2013, no incide lo percibido por los magistrados de alta corte.

Conforme a lo indicado, solicito respetuosamente se niegue el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la parte actora.

Finalmente, se adjunta certificación laboral de la parte demandante actualizada, para que obre como prueba dentro del proceso.

VI. NOTIFICACIONES

1. Las recibiré en la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Calle 72 No.7-96, piso 8, Tel 5553939 Ext. 1078, celular 3163981547 e-mails: aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

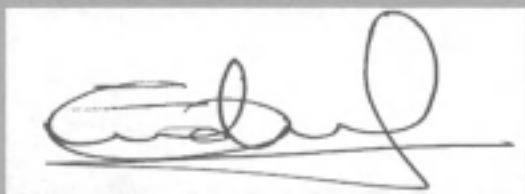
2. Al Litis consorcio necesario, NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en la CARRERA 7 No. 6 – 54 de Bogotá, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

3. Al Litis consorcio necesario, NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA, en la carrera 8 No. 6 – 64 de Bogotá, notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co

53

Hoja No.13

4. Al Litis consorcio necesario, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en la Carrera 6 # 12-62 en Bogotá, notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Del señor Juez, cordialmente,



ANGÉLICA PAOLA ARÉVALO CORONEL
C.C. 1.018.406.144 de Bogotá
T.P. 192.088 del C. S. de la J.



RESOLUCIÓN No. 5393 16 AGO. 2017

"Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, especialmente las conferidas por los artículos 209 de la Constitución Política, el artículo 9º al 12 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política dispuso que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a través, entre otros, de la delegación de funciones.
2. En virtud del Art. 9 de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de entidades públicas que poseen estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos conferidos por la ley, en los empleados públicos del nivel directivo o asesor vinculados al organismo.
3. Que el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, para lo cual podrá constituir apoderados especiales. Función que se ratifica en los artículos 149 del Código Contencioso Administrativo y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. Que, a su vez, el numeral 7º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó a los Directores Seccionales de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, en su ámbito territorial, para lo cual podrán constituir apoderados especiales.
5. Que por lo anterior, el Director Ejecutivo de Administración Judicial ejerce la función en mención en el ámbito territorial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.
6. Que en aras de privilegiar los principios de la función pública de eficacia, economía y celeridad, se hace necesario delegar la función de representación judicial y extrajudicial dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en que sea parte la Nación – Rama Judicial, que corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial, citada en el numeral anterior.

En mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de Administración Judicial,

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3 127011 www.ramajudicial.gov.co



Hoja No.2 de la Resolución No. 5393 de 16 AGO. 2017 *Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial*

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar en el (la) Director(a) Administrativo(a) de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial ante las autoridades de la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación, en los procesos o procedimientos en los cuales la Nación – Rama Judicial intervenga como parte o tercero, que se adelanten en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas, facultad que se extiende a toda clase de actuaciones y diligencias que se presenten ante dichas autoridades.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio de la función delegada, el (la) funcionario (a) delegado (a) deberá conferir poderes a los abogados de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que ejerzan la defensa de los intereses de la Nación – Rama Judicial en el ámbito territorial mencionado en el numeral anterior, con las facultades previstas en el artículo 77 de Código General del Proceso, inclusive la de conciliar en los precisos términos fijados por el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pero no tendrán la facultad de recibir.

ARTÍCULO TERCERO.- Salvo lo dispuesto en el numeral anterior, la disposición de los derechos litigiosos de la Nación – Rama Judicial queda prohibida, sin la autorización previa, escrita y expresa del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá D.C., el

16 AGO. 2017

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO

Elaboró: Betty Yohana Puentes Quera – Directora Administrativa - División de Procesos
Revisó y Aprobó: Pedro Julio Gómez Rodríguez – Director Unidad Asistencia Legal



RESOLUCIÓN NO. 7361 03 NOV. 2016

Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)
En ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas en
el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-
10595 de 2016 proferido por la H. Sala Administrativa.

RESUELVE

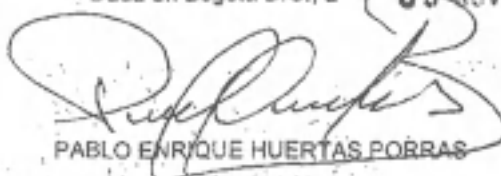
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar en propiedad a la doctora BELSY YOHANA
PUENTES DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No.33.368.171, en el
cargo de Director Administrativo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a

03 NOV. 2016


PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS

Elaboró: LigieCG
Revisó: RHJudith Morante Garcia

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co





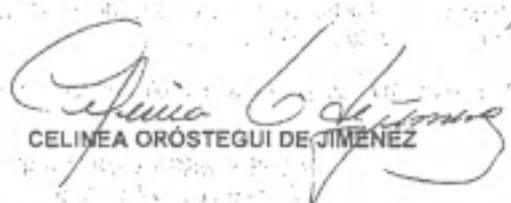
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de noviembre de 2016, se presentó al Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.368.171, con el fin de tomar posesión del cargo al cual fue nombrada, en propiedad, de Director Administrativo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Prestó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

Con efectos fiscales a partir del 1° de diciembre de 2016.

LA DIRECTORA EJECUTIVA


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ

LA POSESIONADA


BELSY YOHANA PUENTES DUARTE



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá - Cundinamarca

La Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca

Nit 800165862-2

HACE CONSTAR

Que la Señora ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE identificada con la cédula de ciudadanía Número No. 1.010.166.922 registra Vinculación a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO desde el 20 de mayo de 2009 y ha desempeñado los siguientes cargos :

CARGO	ESTADO FUNCIONARIO	DESPACHO	FECHA INI	FECHA FIN
OFICIAL MAYOR CIRCUITO 00	PROVISIONALIDAD	JUZGADO 516 ADJUNTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.	20/05/2009	18/12/2009
AUXILIAR JUDICIAL 1 00	PROVISIONALIDAD	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA 002	01/09/2010	07/09/2010
AUXILIAR JUDICIAL 1 00	PROVISIONALIDAD	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA 002	08/09/2010	03/08/2012
SUSTANCIADOR CONSEJO DE ESTADO 00	PROVISIONALIDAD	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA 006	11/02/2013	13/04/2015
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 33	DESCONGESTION	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA 006	14/04/2015	28/05/2015
SUSTANCIADOR CONSEJO DE ESTADO 00	PROVISIONALIDAD	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA 006	29/05/2015	30/11/2015
SECRETARIO CIRCUITO 00	PROVISIONALIDAD	JUZGADO 028 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	01/12/2020	10/12/2020



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá - Cundinamarca

La presente constancia se expide en , 02/02/2021

Johana Rojas

BETTY JOHANA ROJAS ANGARITA

Coordinadora Área de Talento Humano





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DEAJALO20-7689
Bogotá D. C., 19 de octubre de 2020

SEÑOR
CONJUEZ
JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Ciudad

EXPEDIENTE No.	11001333501120190004400
DEMANDANTE:	ANGELA PATRICIA ROA MONTEALEGRE
DEMANDADO:	NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, mayor de edad, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No 33.368.171 de Tunja, Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio de la función de la Representación Judicial y extrajudicial que me fue delegada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial mediante Resolución No. 5393 de 16 de agosto de 2017, confiero poder especial y suficiente a la doctora **ANGÉLICA PAOLA ARÉVALO CORONEL**, abogada de la División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con cédula de ciudadanía No. 1.018.406.144 de Bogotá y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogada No. 192.088 del C.S. de la J., para que asuma la representación y defensa de la Nación - Rama Judicial en el proceso en referencia.

La apoderada queda facultada para conciliar, desistir, sustituir, en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente a faculta de recibir.

Sírvase reconocerle personería.

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE
C.C. No. 33.368.171 de Tunja

Acepto:

ANGÉLICA PAOLA ARÉVALO CORONEL
No. 1.018.406.144 de Bogotá
T.P. 192.088 del C.S. de la J.

Correo electrónico notificaciones:
aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

Iniciales de quien elabora: APAC

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador – 3127011 www.ramajudicial.gov.co



SC5780-4



Hoja No.2

Firmado Por:

**BELSY YOHANA PUENTES DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEAJ
UNIDAD ASISTENCIA LEGAL DIVISIÓN DE PROCESOS**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 642a7daedfc9ba79c2afe6f02846d7c656306188549a21dbf5196cd73374fbf
Documento generado en 21/10/2020 07:58:12 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**